



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: EDUART ANTONIO JIMÉNEZ COLORADO
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 015 2020 00270 01
Sentencia: S-107

AUTO

En atención a la escritura pública 3377 del 02 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a COLPENSIONES a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial al Dr. RICHARD GIOVANNY SUÁREZ TORRES, T.P. 103.505 del C. S. de la Judicatura.

Además, se accede a la sustitución de poder presentada por el referido apoderado, a favor de la Dra. LILIANA CHAVES ORTEGA portadora de la T.P. N° 303.709 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que el apoderado principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a

resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 10 de junio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

EDUART ANTONIO JIMÉNEZ COLORADO demandó a COLPENSIONES para que sea condenada (i) al reconocimiento y pago del retroactivo de su pensión de invalidez desde la fecha de estructuración definida para el 7 de febrero de 2015, al 2 de septiembre de 2018; (ii) de manera subsidiaria, desde esta misma fecha, pero descontando las sumas pagadas por subsidio de incapacidad; (iii) los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 8 de noviembre de 2019, (iv) tanto sobre el retroactivo pagado, (v) como sobre lo que se ordene pagar en la sentencia; (vi) en subsidio de lo anterior, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 28 de agosto de 1971 e inició su vida laboral en el año de 1990, acreditando 370,86 semanas; que COLPENSIONES le calificó una pérdida de capacidad laboral del 80.54% con fecha de estructuración el 2 de junio de 1991, fecha ésta última que fue modificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, al interponer el recurso de apelación, estableciendo como fecha de estructuración de **7 de febrero de 2015**; que solicitó la pensión de invalidez el 8 de julio de 2019, la cual fue reconocida por la demandada desde el **3 de septiembre de 2018** a raíz de ser esta fecha, la última incapacidad recibida; que las incapacidad eran de forma esporádica y por diferentes diagnósticos; y

que interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos desfavorablemente.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta lo relacionado con la fecha de nacimiento del demandante y la iniciación de la vida laboral, así como el reconocimiento de la pensión de invalidez por presentar como pérdida de capacidad laboral el 80.54% y tener como fecha de estructuración el 7 de febrero de 2015; que es cierto que interpuso los recursos de ley contra el dictamen emitido y que es cierto que se le reconoció la pensión de invalidez a partir del 3 de septiembre de 2018, fecha frente a la cual se interpusieron los recursos de ley, los cuales fueron resueltos en debida forma. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación de reconocer retroactivo de la pensión de invalidez, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios o indexación, atentar contra la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 10 de junio de 2022, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín **DECLARÓ** que al demandante **NO** le asiste derecho a que su pensión de invalidez le sea reconocida por COLPENSIONES a partir del 7 de febrero de 2015, fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, así como tampoco hay lugar a que se le descuente del valor del retroactivo las incapacidades sufragadas por la entidad de seguridad social. **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de las pretensiones de la demanda incoadas por el actor, a quien **CONDENÓ** en costas.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, el apoderado del demandante presentó recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia, toda vez que resulta injusto, desproporcional y hasta irracional, el hecho de que absuelva a COLPENSIONES porque se le concedieron al actor unas incapacidades de \$3.999.100; que es más razonable a la luz de la constitución el principio de justicia, el derecho a la seguridad social, a la igualdad, al indubio pro operario, descontar esas incapacidades pagadas al demandante y conceder la pretensión segunda de la demanda, que es reconocer la pensión de invalidez desde el 7 de febrero de 2015 fecha de estructuración de la invalidez, descontando las incapacidades canceladas por el sistema general de salud; que debe prosperar porque el inciso 4º, literal b del artículo 40 de la ley 100 de 1993, indica que el retroactivo debe reconocerse desde el momento que se produzca tal estado, y si bien existe otra norma que habla de la incompatibilidad de estas, ello se subsana simplemente descontando la irrisoria suma por incapacidades.

Que los intereses moratorios deben reconocerse desde el 8 de noviembre del año 2019, pues habían transcurrido más de 4 meses sin que COLPENSIONES reconociera la pensión de invalidez, de la que ya reconoció y la que se reclama, en consecuencia, son procedentes teniendo en cuenta que COLPENSIONES no puede aducir que le pagó una incapacidad en el 2018, sin tener en cuenta si es justo y proporcional, ya que la ley 100 de 1993 establece que se debe reconocer la pensión en el momento en que se produzca tal estado. Por tanto, solicita se reconozcan los intereses desde el 8 de noviembre de 2019 sobre el retroactivo de la pensión de invalidez reconocido en la resolución, y también, sobre el retroactivo que se reclama desde el 7 de febrero del 2015. De no ser procedentes los intereses moratorios, debe reconocerse la indexación por la pérdida adquisitiva de la moneda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES en sus alegatos indicó que se debe acoger la sentencia del juzgado, toda vez que al demandante se le incapacitó en diferentes oportunidades y debe ser reconocida la prestación, tal y como lo efectuó la entidad; y que no deben proceder los intereses moratorios, pues nunca existió un retardo injustificado de la pensión.

Por otro lado, el apoderado del ACTOR expresa en sus alegatos que se debe revocar la sentencia, ya que el demandante tiene derecho a que se le reconozca el retroactivo pensional, pues este se causa desde la fecha de estructuración y el hecho de que se le hayan pagado unas irrisorias incapacidades no puede servir de pretexto para no otorgar la pretensión subsidiaria, es decir, reconocer el retroactivo y descontar las incapacidades reconocidas. Y señala que deben ser reconocidos los intereses moratorios, para resarcir los perjuicios causados.

C O N S I D E R A C I O N E S:

En aplicación del principio de consonancia de que trata el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, la Sala ceñirá su estudio en esta instancia, solo al tema concreto que fue objeto del recurso de apelación presentado, en este caso de manera exclusiva, por el apoderado del demandante. Por consiguiente, decide la Sala en ésta oportunidad la procedencia del reconocimiento del retroactivo de la pensión de invalidez a favor del señor EDUART ANTONIO JIMÉNEZ COLORADO por el período comprendido entre el 7 de febrero de 2015 y el 2 de septiembre de 2018, y si como consecuencia de ello, la entidad está en la obligación de reconocer los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como los intereses sobre el retroactivo ya reconocido, o en subsidio la indexación.

Entonces, se tiene probado y no es tema de debate a esta altura del proceso lo siguiente: **1)** que el demandante fue calificado en primera oportunidad por el otrora ISS, con una pérdida de capacidad laboral del 80.54% y fecha de estructuración del 2 de junio de 1991; **2)** ante la inconformidad presentada frente a la fecha de estructuración, se remitió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia¹, la cual dictaminó como fecha de estructuración el 7 de febrero de 2015; **3)** que presentó solicitud de reclamación de la prestación económica, el 8 de julio de 2019; **4)** que a través de la Resolución SUB 308556 del 12 de noviembre de 2019², COLPENSIONES le reconoció al actor la pensión de invalidez a partir del 3 de septiembre de 2018, en cuantía de \$1'355.921, teniendo en cuenta el artículo 1º de la ley 860 de 2003; **5)** que interpuso los recursos de ley³, resolviéndose el de reposición mediante la resolución SUB 337491 del 10 de diciembre de 2019⁴, de manera desfavorable, y donde se indicó que no reconocería la prestación económica desde la fecha de estructuración - 7 de febrero de 2015 - toda vez que: *"... una vez revisada la certificación de fecha 5 de julio de 2019, expedida por la NUEVA EPS, se establece que la última incapacidad reconocida y pagada fue para el ciclo 2018/09/02, y en concordancia con la Circular 01 de 2012, la efectividad es 03 de septiembre de 2018, es decir al día siguiente del último pago de la incapacidad por parte de la EPS."*; y **6)** que el recurso de apelación fue resuelto a través de la resolución DPE 1608 del 29 de enero de 2020⁵, en donde se confirmó en todas sus partes la resolución inicial.

La pensión de invalidez se encuentra regulada en los artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003, y se reconoce a la persona que ha sido declarada invalida al habersele determinado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Derecho que en los términos del artículo 40 de la propia ley 100 surge, en principio, desde la fecha en que se produzca el estado de invalidez.

¹ Folios 27 a 31 de la demanda

² Folios 33 a 39 de la demanda

³ Folios 41 a 44 de la demanda

⁴ Folios 47 a 52 de la demanda

⁵ Folios 59 a 64 de la demanda

No obstante, debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 10 del decreto 758 de 1990 y 3º del decreto 917 de 1999 que expresamente prohíben la posibilidad de recibir simultáneamente el subsidio por incapacidad y alguna otra prestación económica derivada del estado de invalidez, ya que, *“En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.”*

De ésta manera, es posible concluir que, si bien en principio, la fecha de la estructuración de la invalidez es la que determina la causación del derecho a la pensión, las mesadas pensionales solo podrán reconocerse por aquellos períodos en los que no se hubiere recibido por parte del afiliado algún subsidio por incapacidad temporal, ya sea por la EPS o por la entidad de pensiones, pues con aquellos dineros recibidos como incapacidad, el afiliado logra cubrir sus necesidades básicas y elementales para su auto subsistencia, de manera que carecería de respaldo fáctico reconocerle las mesadas pensionales que reclama por el mismo lapso y con fundamento en el mismo hecho, en tanto ambas llevan implícitas una misma finalidad económica.

Esta misma conclusión es la que ha adoptado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 1562 del 30 de abril de 2019, rad. 73026, en la que se cita como referencia en igual sentido la SL 619 del 28 de agosto de 2013, rad. 40887. Allí se ha indicado que el retroactivo de la pensión de invalidez es procedente desde la fecha de estructuración. En ese sentido, en la primera de las providencias referidas se dijo:

“Al respecto, se insiste en que el citado artículo 40 de la Ley 100 de 1993 es claro en indicar que la pensión de invalidez por riesgo común debe otorgarse, de manera retroactiva, a partir de la fecha en que se produce el estado de invalidez, es decir, desde cuando la pérdida de la capacidad laboral alcanza un porcentaje igual o superior al 50% (artículo 39 de la Ley 100 de 1993). De lo que se deriva que el legislador en el citado precepto no estableció ni explícita ni tácitamente, condición

alguna, diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento del derecho pensional desde la fecha de estructuración.

Por tanto, ese estado de invalidez igual o superior al 50%, previamente determinado por el organismo médico competente, **no puede entenderse disminuido o extinguido por el hecho de que el afiliado hubiese percibido pagos por concepto de incapacidades temporales, pues estos pagos no redundan en la disminución de la invalidez, cuyo amparo es el objetivo principal del derecho pensional.**

De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, cuando, como en el presente asunto, **el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.**" (Negrilla fuera del texto)

Ahora, no desconoce la Sala, que ese criterio ha sufrido una variación desde sentencia SL5170-2021, rad. 88003, en la que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo:

"Así, en la incapacidad temporal el subsidio se paga a partir de la aparición del hecho causante, que lo es la enfermedad o lesión que le impide desempeñar la labor por un tiempo determinado, hasta que otro hecho causante introduce una nueva situación protegida en lugar de la anterior, como cuando se declara que las lesiones se convierten en definitivas, de tal manera que los efectos económicos de la pensión de invalidez, en los supuestos en los que su declaratoria esté precedida de una incapacidad temporal, se producen a partir de la extinción de la última incapacidad y, sino lo está, se producen a partir de la fecha de estructuración del estado de invalidez.

(...) el eje central de delimitación está en el momento en que se califica el estado de invalidez, quedando a partir de allí extinguida la incapacidad temporal, pero limitándose la retroactividad de la nueva prestación al momento en que se

efectuó el último pago de la prestación que la antecede, dado el carácter secuencial de la acción protectora de la seguridad social, donde los efectos económicos de las prestaciones no siempre coinciden con el hecho causante en sentido material, pues la previsión legal es muy clara en relacionar la fecha inicial de la prestación por invalidez con la fecha de finalización formal de la incapacidad temporal.

(...)

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario precisar su doctrina, en el sentido de señalar **que cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad**, postura con la cual queda rectificada y delineada su posición con relación a criterios anteriores que le hubieren sido contrarios (SL1562-2019).” (Negrilla fuera del texto)

Conforme a la jurisprudencia vigente, en principio se podría decir que el demandante no tendría derecho a las pretensiones solicitadas, sin embargo, no se puede pasar por alto que la misma Corte Suprema de Justicia le ha aplicado una excepción. Así, en la sentencia SL 4299 del 23 de noviembre de 2022, esa misma Corporación se ocupó de analizar una situación similar a la que ocurre en este caso en el sentido de que se reclamaba un retroactivo pensional por un margen de tiempo durante el cual se evidenciaron unos pocos subsidios por incapacidad, entendiendo que:

“... dicha línea interpretativa de las citadas normas, **tiene excepción**, por cuanto, a diferencia del presupuesto material en que se sustenta aquella, **en el presente asunto no se constata que existió un proceso incapacitante temporal intermitente** del señor Orjuela Melo desde la fecha en que se fijó técnicamente la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, en porcentaje superior al 50%, que lo calificara como invalido, **sino, tal como se desprende de las certificaciones expedidas por La Nueva EPS, que únicamente se concedieron incapacidades por enfermedad temporal** y se canceló el auxilio correspondiente, a

partir del 20 de agosto de 2015 hasta el 1° de noviembre de 2015, y del 14 de noviembre de 2015 al 12 de marzo de 2016.”
(Resalto de la Sala)

Y, se continúa concluyendo en la misma providencia, que:

*“... en el referido lapso, esto es, del 21 de junio de 2012 al 19 de agosto de 2015, **tampoco se verifica que la acción protectora de la seguridad social hubiese amparado al actor, o este hubiese recibido ingresos como trabajador dependiente o independiente, por cuanto tal como se verifica del historial laboral expedido por Colpensiones, y se desprende del certificado de incapacidades emanado de la Nueva EPS, este dejó de cotizar al sistema pensional** a partir de febrero de 2010, y el auxilio recibido del sistema de salud, lo fue por sus exclusivas cotizaciones al mismo, ya que, para entonces, **no se encontraba vinculado y cotizando al sistema pensional**. Razón por la cual, procede concluir válidamente que se le adeudan las mesadas pensionales causadas entre el 21 de junio de 2012 y el 19 de agosto de 2015, y del 2 al 13 de noviembre de 2015.*

En efecto, durante ese interregno, en ningún momento se cruzaron los subsistemas de salud y pensiones, en tanto se reitera, el actor no estuvo cotizando a este último sistema, esto es, el pensional, no siendo predicable la incompatibilidad que se predica en el sub iudice.” (Negrilla de la Sala)

Pues bien. En el presente caso, analizada la prueba en su conjunto, se encuentra lo siguiente: **i)** el período reclamado por el actor va del 7 de febrero de 2015, cuando se estructuró la invalidez, al 2 de septiembre de 2018 fecha en la que COLPENSIONES reconoció la prestación económica; **ii)** el actor presenta varias incapacidades pero interrumpidas por enfermedad general con diferentes códigos de diagnósticos, desde el 19 de octubre de 2011 al 5 de octubre de 2018, como se comprueba con el certificado de incapacidades emitido por la NUEVA EPS⁶; y **iii)** las cotizaciones al sistema general de pensiones fueron realizadas hasta el 30 de diciembre de 2018, como trabajador independiente, en algunas oportunidades para COMFAMA hasta el 1°

⁶ Folios 53 y 55

de enero de 2017, bajo el pago de planilla tipo “Y”, y las posteriores fueron realizadas por sí mismo.

En estas condiciones puede concluirse que, si bien en este caso no hubo un *“proceso incapacitante temporal intermitente”* del demandante con posterioridad a la fecha de estructuración, al existir incapacidades discontinuas, se observa que el actor continuó aportando al Sistema General de Pensiones, por lo que no encaja en la excepción planteada por nuestro órgano de cierre en la sentencia arriba mencionada.

En consecuencia, considera la Sala, que se debe **CONFIRMAR** en este sentido la sentencia de primera instancia, pero por las razones acá manifestadas.

Intereses moratorios.

En este aspecto, se impone advertir que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 propende por el pronto pago de las mesadas pensionales para así proteger los derechos de los pensionados frente a las dilaciones injustificadas en el trámite administrativo. Proceden los mismos: *“en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”; y su pago se realizará “a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”*.

Se incurre en mora, bien cuando no se ha cumplido la obligación dentro del término estipulado por la ley o el contrato o convención, o bien cuando la deuda debió ser ejecutada dentro de cierto tiempo, por haberse fijado un término o señalado un plazo para ello, y el deudor lo ha dejado vencer, sin cumplirla o ejecutarla. Eventos en los cuales se genera la obligación al pago de los intereses por mora, como forma de reparación del perjuicio sufrido por el acreedor ante el incumplimiento del deudor, o simplemente ante su cumplimiento tardío, inoportuno o extemporáneo.

De igual forma, es claro que la mora de la entidad en estos casos solo opera luego de pasados cuatro meses⁷ de radicada la solicitud de reconocimiento pensional, con el lleno de los requisitos, lo cual es apenas lógico, puesto que la entidad, dentro de tal plazo y una vez presentada la solicitud de la pensión por parte del afiliado, previo al reconocimiento del derecho, debe entrar a corroborar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normatividad aplicable.

Ahora. Este punto de inconformidad debe dividirse en dos estudios, primero, los intereses solicitados frente al retroactivo acá pretendido, y los intereses de mora sobre el retroactivo reconocido en la resolución SUB 308556 del 12 de noviembre de 2019, por medio de la cual se le reconoció el derecho al actor.

Frente al primer punto, debe simplemente señalarse que al no existir un valor pendiente de pago por concepto de retroactivo pensional del 7 de febrero de 2015 al 2 de septiembre de 2018, tampoco hay lugar a reconocer intereses de mora.

Sin embargo, no sucede lo mismo con la segunda petición, cuyo pronunciamiento fue omitido por la juez, pues de la resolución que le reconoció la prestación económica al actor, se observa que éste elevó la solicitud al respecto el día 8 de julio de 2019⁸, y le fue resuelta a través de la resolución SUB 308556 del 12 de noviembre de 2019, acto administrativo notificado el 18 de noviembre de 2019⁹, en donde COLPENSIONES le canceló al demandante un retroactivo pensional causado desde el 3 de septiembre de 2018 por valor de \$20'990.478, ingresado en nómina de diciembre de 2019 para ser pagado al mes siguiente, es decir, enero de 2020.

En tal sentido, para la Sala es evidente que la entidad incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales causadas, de manera que hay

⁷ Parágrafo 1º, último inciso, artículo 33 de la ley 100 de 1993 y sentencia SU-975 del 2003.

⁸ Folio 32 de la demanda

⁹ Folio 33 de la demanda

lugar a concederlos atendiendo a que, en materia pensional, la norma que los consagra propende por el pronto pago de las mesadas pensionales para así proteger los derechos de los pensionados frente a las dilaciones injustificadas en el trámite administrativo. Intereses que son procedentes en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales cuando se ha causado el derecho, y no solo cuando son reconocidos con posterioridad a la causación.

De ésta manera, teniendo claro que el demandante presentó la solicitud con el cumplimiento de todos los requisitos legales desde el 8 de julio de 2019, significa que la entidad sí incurrió en mora al tardarse más de los 4 meses que consagra la ley para resolver este tipo de solicitudes, y que se cuentan a partir de la radicación de la solicitud por el peticionario y hasta la fecha de pago, que en este caso corresponde al mes de enero de 2020.

Así pues, los intereses moratorios deberán ser liquidados desde el 8 de noviembre de 2019, esto es, 4 meses después de elevada la solicitud, y hasta el 1º de enero de 2020, momento en que se pagó la obligación por la suma adeudada por concepto de mesadas pensionales; lo que arroja como resultado una suma de **\$3'378.103**

Se advierte, además, que es necesario tener en cuenta que para llegar a ese resultado fue necesario descontar de cada mesada el valor del porcentaje correspondiente a la cotización al Sistema General de Salud equivalente al 12%, lo cual opera por el solo ministerio de la ley conforme al artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y con sujeción a reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en tanto se trata de un porcentaje que realmente no corresponde al pensionado sino que va destinado al sistema.

Fecha del cálculo	1-ene-20
Período	20201
Interés Bancario Corriente	18,77%
Tasa E.A. Moratoria	28,16
Tasa Nominal Anual	25,07%
Tasa Nominal Diaria	0,0686718%

Desde	Hasta	Fecha de mora	Diferencia en días	mesadas con descuentos en salud	Intereses
1-sep-18	30-sep-18	1-oct-18	457	\$ 1.113.659	\$ 349.500
1-oct-18	31-oct-18	1-nov-18	426	\$ 1.193.210	\$ 349.064
1-nov-18	30-nov-18	1-dic-18	396	\$ 2.386.421	\$ 648.964
1-dic-18	31-dic-18	1-ene-19	365	\$ 1.193.210	\$ 299.081
1-ene-19	31-ene-19	1-feb-19	334	\$ 1.231.154	\$ 282.382
1-feb-19	28-feb-19	1-mar-19	306	\$ 1.231.154	\$ 258.710
1-mar-19	31-mar-19	1-abr-19	275	\$ 1.231.154	\$ 232.500
1-abr-19	30-abr-19	1-may-19	245	\$ 1.231.154	\$ 207.137
1-may-19	31-may-19	1-jun-19	214	\$ 1.231.154	\$ 180.928
1-jun-19	30-jun-19	1-jul-19	184	\$ 1.231.154	\$ 155.564
1-jul-19	31-jul-19	1-ago-19	153	\$ 1.231.154	\$ 129.355
1-ago-19	31-ago-19	1-sep-19	122	\$ 1.231.154	\$ 103.146
1-sep-19	30-sep-19	1-oct-19	92	\$ 1.231.154	\$ 77.782
1-oct-19	31-oct-19	1-nov-19	61	\$ 1.231.154	\$ 51.573
1-nov-19	30-nov-19	1-dic-19	31	\$ 2.462.309	\$ 52.418
					\$ 3.378.103

Así las cosas, la decisión de primera instancia deberá ser **REVOCADA** en este aspecto, y en su lugar, se **CONDENARÁ** a COLPENSIONES por este concepto.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día 10 de junio de 2022, pero la **REVOCA** en cuanto absolvió a COLPENSIONES del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, sobre el retroactivo concedido en la Resolución 308556 del 12 de noviembre de 2019, y en su lugar la **CONDENA** por este concepto en la suma de **\$3'378.103**.

Sin costas en esta instancia

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ad07341c1f363595f528903591a1416cff52d26337a11d013f5f0ca044763432**
Documento generado en 27/04/2023 02:47:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>